EDICTO. CONSEJO DE ESTADO. JUSTICIA -GUIA - CONTROL. Radicado: 11001-03-15-000-2018-02926-00. Demandante: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR --I.C.B.F.-. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA. Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil dieciocho (2018). Referencia: ACCIÓN DE TUTELA. Radicación: 11001-03-15-000-2018-02926-00. Demandante: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR --I.C.B.F.-. Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Y OTRO. AUTO -- ADMITE Y NIEGA MEDIDA CAUTELAR. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar --I.C.B.F. interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Chocó y El Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó con el fin de que se le protejan los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.. Solicitó como medida cautelar lo siguiente: "(…)... Por lo tanto; solicitamos de manera respetuosa al honorable Consejo de Estado, decretar la siguiente medida provisional:. 1. Suspender los efectos jurídicos y por consiguiente el cumplimiento de la sentencia 195 del 4 de diciembre de 2017 dictada por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó confirmada por el Tribunal Administrativo del Chocó mediante sentencia dictada en estrados cuando se realizó la audiencia de alegatos de conclusión el día 22 de mayo de 2018, hasta tanto haya sentencia de fondo que resuelva este recurso constitucional"(1). La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política faculta a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares, en los casos en que así se autoriza. El Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, establece que el juez constitucional cuando lo considere necesario y urgente para proteger un derecho fundamental "suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere" y, dicha suspensión puede ser ordenada de oficio o a petición de parte. En efecto, el artículo 7° de esta normativida dispone: "Artículo 7o. Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.. Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante.. La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible.. El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan circunstancias que hagan más gravosa la violación o amenaza que se pretende evitar. Para el efecto podrá ordenar a cualquiera de las partes, o a quien amenace el derecho, que preste caución suficiente y adecuada para responder por los perjuicios que se puedan causar. Para fijar el monto de la caución el juez tendrá en cuenta la gravedad de la violación o amenaza, la situación económica de la persona obligada y la forma más eficaz de garantizar el derecho. La caución podrá ser real o personal, bancaria o de compañía de seguros, a juicio del juez. Para hacer efectiva la caución se procederá conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil. Para levantar la medida cautelar el juez podrá ordenar que el peticionario preste caución suficiente para responder por los perjuicios que se puedan causar a la parte afectada con la medida